


RV: C23-57329 RV: RADICADO 76001333300920200000800

Técnico Sistemas Oficina Apoyo Juzgados Administrativos - Valle del Cauca - Cali
<tecofadmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 17/10/2023 3:46 PM

Para: Juzgado 09 Administrativo - Valle del Cauca - Cali <adm09cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Carlos Armando Sussmann <direccion@slcabogados.com.co>

 4 archivos adjuntos (2 MB)

RECURSO DE APELACIÓN SUB.pdf; CONTESTACION DEMANDA LUZ ESTELLA MEDINA Y OTROS.pdf; LLAMAMIENTO EN GARANT+IA a CHUBB.pdf; Email Luz Stella Medina.pdf;

Cordial saludo,

Remito constancia de que el correo recibido, fue radicado en el aplicativo denominado SAMAI proceso judicial.

Señor usuario: Ya está habilitada la ventanilla digital en la plataforma SAMAI para los Juzgados Administrativo de Cali, por ese canal puede remitir sus memoriales y tendrá de manera inmediata una constancia de radicación.

Por favor utilizar un solo canal para el envío de sus memoriales.

Se remite enlace. <https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/>

Por favor no responda a este correo, este email solamente es para dar respuesta a radicación de correspondencia.

Comuníquese con nosotros al email of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

SAMAI | Proceso Judicial

relatoria.consejodeestado.gov.co/8091/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013333009202000008007600133

Consulta de procesos Consulta de procesos SAMAI | Inicio relat... SAMAI | Inicio SAMAI.GOV.CO

Inicio Ventanilla virtual Consulta procesos Estadísticas Validador documentos Ayuda Jurisprudencia CE Mi perfil Salir

Historial de actuaciones judiciales

Historial de actuaciones Tramitar

Buscar: Para buscar una actuación en la historia digite aquí el dato a buscar

Filtrar: Ver todo Decisiones Despacho Secretaría Notificaciones

Filtros avanzados Ver más información de la anotación/detalle Ver todas las actuaciones

Total registros: 35 Pág. 3 de 3

Última Anterior Siguiente Primera Ir a Pág: 1 2 3

	Fecha registro	Fecha actuación	Actuación	Anotación/detalle	Estado	Anexos	Índice
Seleccionar	17/10/2023 15:44:45	17/10/2023	Recepción memorial OA al despacho	EOZ-C23-57329-RECURSO DE APELACION-CARLOS ARMANDO ...	REGISTRADA	5	00035
Seleccionar	13/10/2023 9:36:52	12/10/2023	Recepción memorial OA al despacho	APC-C23-56697 -ALLEGA RECURSO DE REPOSICIÓN Y SUBS...	REGISTRADA	5	00034
Seleccionar	11/10/2023 15:18:53	11/10/2023	Envío de Notificación	HSR-Se notifica:Auto resuelve llamamiento garantía...	RESERVADA	1	00033
Seleccionar	11/10/2023 15:07:01	11/10/2023	Envío de Notificación	HSR-Se notifica:Auto resuelve llamamiento garantía...	RESERVADA	1	00032
Seleccionar	11/10/2023 15:00:39	11/10/2023	Envío de Notificación	HSR-Se notifica:Auto resuelve llamamiento garantía...	RESERVADA	1	00031

SAMAI | Powered by CETIC

¿Como nació SAMAI?
SAMAI surge de la necesidad de expandir e integrar los servicios de los sistemas empleados en la corporación. En un esfuerzo conjunto entre los magistrados de la corporación y la Oficina de Sistemas, se diseñó, desarrolló e implementó el sistema para la gestión judicial SAMAI, con altos componentes de seguridad, acorde a los estándares tecnológicos actuales, previa identificación de las necesidades de los usuarios, con el fin de proveer el medio que acercara la justicia al ciudadano.
SAMAI recibió la distinción de la "Mejor práctica judicial en materia de justicia", dentro de la "Gran Cumbre de la Justicia y la Novena Versión de los Premios Excelencia en la Justicia", organizada por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) realizada el 14 de diciembre de 2020.

Contacto soporte técnico
Calle 12 No. 7 - 65 Bogotá D.C. - Colombia
PBX (601) 350-6700
Soporte (601)565-8500 Ext 2404
cetic@consejodeestado.gov.co

Horarios de atención
Atención virtual
Vía web 24 horas
Atención presencial
Lunes a viernes
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Links de interés
Correo Institucional
Directorio JCA
Déje sus comentarios

EDWARD ANDRES OSPINA ZAPATA

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Cali



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Valle del Cauca - Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 15:38

Para: Técnico Sistemas Oficina Apoyo Juzgados Administrativos - Valle del Cauca - Cali
<tecofadmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: C23-57329 RV: RADICADO 76001333300920200000800

DHORA STELLA RAMÍREZ

ÁREA DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: direccion slcabogados.com.co <direccion@slcabogados.com.co>

Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 15:19

Para: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Valle del Cauca - Cali

<of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: consultores.juridicos@oscal.net <consultores.juridicos@oscal.net>; Andrés Eduardo Pineda Arango

<andresepa@hotmail.com>; Secretaria General <secretaria.general@nuevaeps.com.co>;

manuelarenas483@hotmail.com <manuelarenas483@hotmail.com>; notificaciones

<notificaciones@santander.gov.co>; Julieth Mora <notificaciones@bucaramanga.gov.co>;

litigios@medinaabogados.co <litigios@medinaabogados.co>

Asunto: RADICADO 76001333300920200000800

En mi calidad de apoderado de **CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE**, dentro del proceso de la referencia, respetuosamente me dirijo al despacho con la finalidad de enviar memorial para su conocimiento y fines pertinentes

Así mismo y de conformidad con lo contemplado en el inciso primero del art. 3° del Decreto Legislativo 806 de 2020, en concordancia con lo establecido en el artículo 78 numeral 5 del CGP, cumpliendo con la carga procesal impuesta estamos enviando a los demás sujetos procesales copia del presente mensaje con su respectivo adjunto.

Igualmente de acuerdo a lo establecido en la citada en norma, nos permitimos informar que el correo electrónico para efectos de notificaciones judiciales dentro del presente proceso, el cual es el que obra en el Registro Nacional de Abogados es: direccion@slcabogados.com.co



CARLOS ARMANDO SUSSMANN P

Director

Phone: + 57 1 3001953 Ext. 101

Mob: +57 1 3108596301

Email: direccion@slcabogados.com.co

SUSSMANN LEGAL Calle 100 No. 14 - 63 - Oficina 401 - Bogotá, Colombia

CONSULTING SAS www.slcabogados.com.co

DERECHO MEDICO – RESPONSABILIDAD MEDICA

Este mensaje y los archivos adjuntos remitidos con él han sido elaborados únicamente para uso del destinatario y pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial. Si el lector de este mensaje no es el destinatario señalado, o la persona responsable por la entrega de este mensaje a quien está dirigido, queda usted advertido de que cualquier revisión, divulgación, difusión o copia no autorizada de este mensaje y sus archivos adjuntos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor sírvase informarlo de inmediato al remitente respondiendo este mensaje y por favor, bórrelo de su computadora. Finalmente, si un correo electrónico enviado a través de nuestro servidor (@slcabogados.com.co) no contiene información directamente relacionada con nuestro giro de negocio y propósitos de este, entonces deberá ser considerado como que refleja la opinión personal del remitente, bajo responsabilidad exclusiva de éste, y de ninguna manera involucrará o comprometerá a nuestra empresa.

This email message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized review, disclosure, dissemination or copying of this message or its attachments, is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by replying to this message and please delete it from your computer. Finally, if an email sent through our server (@slcabogados.com.co) does not contain information directly related to our line of business and the

purposes thereof, then it should be regarded as reflecting the personal opinion of the sender, at his sole responsibility, and will in no way bind or commit our company

Señores

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

E.

S.

D.

MEDIO DE CONTROL	:	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE	:	LUZ ESTELA MEDINA TOVAR Y OTROS
DEMANDADOS	:	MUNICIPIO DE CALI Y OTROS
RADICADO	:	76001-33-33-009-2020-00008-00
ACTO PROCESAL	:	CONTESTACION DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTIA REALIZADO POR NUEVA EPS

CARLOS ARMANDO SUSSMAN PEÑA mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 3.229.0902 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No.89069 expedida por el C.S. de la J. , en mi calidad de apoderado judicial de **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE**, identificado con NIT **900.771.349-7** y con domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali., el cual esta conformado por la **CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE SAS** NIT **900891513-3**, **CLINICA DESA SAS**, NIT **900771349-7** y el **INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO - IDIME**, NIT **800065396-2.**, según poder, el cual adjunto, otorgado por su Representante, **JAIME QUINTERO SOTO**, identificado con el número de cédula 19.447.078 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., conforme se acredita con el acta de nombramiento anexa, por medio del presente escrito y dentro del término y oportunidad legal, procedo hacer uso del derecho de defensa y contradicción en el acto procesal de contestación a la demanda formulada ante usted por **LUZ ESTELA MEDINA Y OTROS** así como al llamamiento en garantía incoado por **NUEVA EPS** , demandada dentro del proceso, de la siguiente manera y en los siguientes términos:

1. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA

PRIMERO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos propios de conocimiento de un tercero

SEGUNDO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos propios de conocimiento de un tercero

TERCERO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos propios de conocimiento de un tercero

CUARTO No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. No es un hecho es una apreciación.

QUINTO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos propios de conocimiento de un tercero

SEXTO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos propios de conocimiento de un tercero

SÉPTIMO: No nos consta. Son hechos propios de conocimiento de un tercero

OCTAVO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos propios de conocimiento de un tercero

NOVENO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos propios de conocimiento de un tercero

DECIMO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos Qque ocurren fuera de la esfera de nuestro conocimiento

UNDÉCIMO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos Qque ocurren fuera de la esfera de nuestro conocimiento

DECIMOSEGUNDO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos que ocurren fuera de la esfera de nuestro conocimiento

DECIMO TERCERO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos que ocurren fuera de la esfera de nuestro conocimiento

DECIMO CUARTO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos que ocurren fuera de la esfera de nuestro conocimiento

DECIMO QUINTO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos que ocurren fuera de la esfera de nuestro conocimiento

DECIMO SEXTO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos propios de conocimiento de un tercero

DECIMO OCTAVO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos propios de conocimiento de un tercero

DECIMO NOVENO: No es un hecho es una petición que debe fundamentarla

VIGÉSIMO: No nos consta, nos atenemos a lo que se pruebe. Son hechos propios de conocimiento de un tercero

VIGÉSIMO PRIMERO: No es un hecho es una petición que debe fundamentarla

VIGÉSIMO SEGUNDO: No es un hecho

1.2. A LAS PRETENSIONES

De manera general, me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte actora, teniendo en cuenta que no le asiste el derecho invocado, toda vez que no existe responsabilidad en cabeza del **CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE**, ni de ninguno de sus consorciados.

Manifiesto al Despacho que coadyuvo la oposición formulada por la entidad llamante en garantía, **NUEVA EPS**, y de los demás demandados, frente a todas las pretensiones que se elevan en el libelo petitorio y solicito que sea absuelta de responsabilidad, procediendo a la condena en costas y agencias en derecho a que haya lugar.

Como fundamento de dicha oposición, se proponen las siguientes:

2. EXCEPCIONES DE FONDO DE LA DEMANDA

2.1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE

La falta de legitimación en la causa ha sido entendida de manera pacífica en la doctrina y en la jurisprudencia como la "calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso, de forma tal, que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas."¹

Bajo el mismo derrotero, el H. Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, en sentencia del 09 de agosto de 2012, con ponencia de Marco Antonio Velilla¹, precisó que, ante la falta de legitimación en la causa por pasiva, por la inexistencia de una relación jurídica de derecho sustancial entre las partes procesales, no es dable reconocer responsabilidad alguna, en los siguientes términos: “De lo anterior se colige que la legitimación en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación. En tal orden, cabe destacar que al expediente no se allegó prueba de ningún vínculo existente entre la citada sociedad y el Instituto Nacional de Concesiones – INCO, razón por la cual no es dable condenar a una sociedad sin existir elementos de juicio suficientes para ello, pues no se acreditó la existencia de una relación jurídica-sustancial.” Es dable concluir, de lo expuesto hasta este momento, que quien se encuentre legitimado en la causa por activa para reclamar el reconocimiento o la protección judicial de un derecho sustancial, se encuentra en la obligación de que contra quien pretenda se oponga dicho reconocimiento o protección sea quien, sustancialmente, tenga la obligación correlativa de respetarlo. Descendiendo al caso que nos ocupa, deberá apreciar el Despacho que en los hechos en los que se funda las pretensiones de la demanda, no se evidencia cual fue el presunto error o negligencia médica, ora por acción u omisión, en que incurrió el **CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE** o

¹ Consejo de Estado, sentencia de 25 de julio de 2011, expediente: 20.146.

sus consorciados y que generó algún daño al Señor JEFFERSON MOLANO MEDINA ; vale la pena recordar que la Jurisprudencia del máximo ente de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, ha sido pacífica y reiterativa en recordar que, por regla general, el título de imputación aplicable a asuntos médico-sanitarios es el de falla probada en el servicio.

Bajo ese derrotero y con base en que no existe en el plenario ningún presupuesto factico ni probatorio que genere o conlleve a la acreditación de responsabilidad médica en cabeza de los demandados-, solicito al Sr. Juez declarar probada la presente excepción, negando las pretensiones de la demanda y condenando en costas a la parte actora.

2.2. AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS AXIOLOGICOS DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA - AUSENCIA DE CULPA Y NEXO DE CAUSALIDAD.

A fin de desvirtuar la improbable responsabilidad de los demandados y por contera de mi defendida **CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE**, en la producción de los daños. cuya indemnización persigue la parte actora a través del presente proceso, cumple memorar que la jurisprudencia y la doctrina tradicionalmente han enmarcado la responsabilidad de las clínicas y hospitales dentro de las consecuencias derivadas del acto médico; en otras palabras, la responsabilidad de dichas instituciones se encuentra atada a la acreditación de la culpa de los profesionales de la salud al servicio del establecimiento correspondiente, tal y como se indicó en sentencia 2001-03485/47873 del Consejo de estado, sección tercera, de 10 de septiembre de 2010, M.P., María Adriana Marín:

“En lo concerniente a la primera conclusión, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, por regla general, el título de imputación aplicable en asuntos médico- sanitarios es el de la falla probada el servicio. Como consecuencia, le corresponde a la parte demandante demostrar el desconocimiento de la *lex artis* aplicable al caso concreto, en otros términos, la desatención a las obligaciones que emanan del conocimiento científico” Ahora bien, en consideración a la responsabilidad estatal por falla en el servicio de salud, el Consejo de Estado, inicialmente, sostuvo que el asunto debía resolverse como falla del servicio probada, bajo el entendido que las prestaciones otorgadas por el prestador del servicio médico eran de medio y no de resultado. La tesis previamente expuesta fue modificada mediante Sentencia del 30 de julio de 1992, en la cual se expresó lo siguiente: “(...) Sin duda, resultaría más beneficioso para la administración de justicia en general, resolver esta clase de conflictos, si en lugar de someter al paciente, normalmente el actor o sus familiares, a la demostración de las fallas en los servicios y técnicas científicas prestadas por especialistas, fueran estos, los que por encontrarse en las mejores condiciones de conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta profesional, quienes satisficieran directamente las inquietudes y cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan. (...)” Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 6782, sentencia del 30 de julio de 1992, M.P. Daniel Suárez Hernández.

Sin embargo, dicha posición fue matizada de conformidad con lo expuesto en Sentencia 15.283 de agosto 31 de 2006, expedida por el Consejo de Estado, que, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, cuando sostuvo:

“(…) En relación con esta posición, reiterada por la jurisprudencia de esta Sala a partir de la expedición del fallo citado, se considera necesario precisar que, si bien tiene origen en el llamado principio de las cargas probatorias dinámicas —cuya aplicación, aunque no tiene sustento en nuestra legislación procesal, puede decirse que encuentra asidero suficiente en las normas constitucionales que relieves el principio de equidad— ha resultado planteada en términos tan definitivos que se ha puesto en peligro su propio fundamento. En efecto, el planteamiento ha llevado a aplicar, en todos los casos de daño causado en desarrollo de la prestación del servicio médico asistencial, la teoría de la falla del servicio presunta, exigiéndosele siempre a las entidades públicas demandadas la prueba de que dicho servicio fue prestado debidamente, para poder exonerarse de responsabilidad. Resulta, sin embargo, que no todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas o científicas. Habrá que valorar, en cada caso, si estas se encuentran presentes o no. Así, habrá situaciones en las que, sin duda, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para demostrar ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí está precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación se hace imposible ante el recurso obligado a la teoría de la falla del servicio presunta, donde simplemente se produce la inversión permanente del deber probatorio. Así las cosas, la tarea del juzgador resulta más ardua y exigente, pues es él quien debe establecer, en cada caso, cuál de las partes se encuentra en condiciones más favorables para demostrar cada uno de los hechos relevantes, en relación con la conducta del demandado, para adoptar la decisión. (...) (2)”.

En este orden de ideas, la Sala ha concluido que la demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial será carga de la parte demandante, a menos que aquella resulte extraordinariamente difícil o prácticamente imposible y dicha carga se torne, entonces, excesiva. Solo en eventos como estos y de manera excepcional, la Sala (3) ha considerado procedente la inversión del deber probatorio, previa la inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil —que obligaría a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su deber de prestar debidamente el servicio mencionado—, por resultar la regla en él contenida, en el respectivo caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial (4) .”.

Luego en este orden, lo primero a determinar será si el presente asunto reviste complejidad técnica o científica a efectos de llevar a cabo la inversión de la carga de la prueba que se plantea en el citado pronunciamiento judicial; en caso negativo, será la parte actora quien deba solventar la misma.

A fin de solucionar el interrogante planteado, tenemos que en el asunto bajo estudio no se cumplen las condiciones establecidas en el citado fallo para invertir la carga de la prueba, puesto que la causa petendi y el consecuencial problema jurídico se enmarcan en dilucidar si el fallecimiento de la Señor JEFFERSON MOLANO MEDINA fue producto de una atención adecuada o no, por el contrario, tal perjuicio se presentó como un problema derivado de su quebranto de salud.

En el proceso de autos, es claro que no existe complejidad como para invertir la carga de la prueba, es decir, que debe ser el demandante quien debe probar la falla medica que se le endilga a la entidad llamante en garantía.

Partiendo de lo anterior, a la fecha NO existe prueba alguna, ni siquiera indiciaria, que permita concluir el fallecimiento del Señor JEFFERSON MOLANO MEDINA haya

sido por culpa o negligencia del CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE o sus consorciados.

Pese a que lo anterior da al traste con las pretensiones de la demanda, procederemos a analizar los elementos que integran la responsabilidad médica a saber: **I)** un daño antijurídico, **II)** la existencia de un hecho culposo y **III)** un nexo de causalidad entre estos.

Por su parte, resulta imperativo mencionar que el prestador del servicio puede eludir la responsabilidad que se le endilga si acredita que su personal médico obró con la diligencia y el cuidado debido, que demandaba la situación o mediando una causa extraña.

En este orden de ideas, partiendo del presupuesto que de no encontrarse acreditado los tres elementos citados de manera concomitante, no podrá producirse una condena en contra de la pasiva y por ende de la llamada en garantía.

En el presente asunto no se acreditan fehacientemente los elementos axiológicos de la responsabilidad médica, teniendo el deber de hacerlo la parte actora conforme con las cargas procesales de que trata el artículo 167 del CGP, por las consideraciones que pasan a exponerse así:

1. En lo que concierne a la acreditación del daño: Tal como ha sido expuesto por el profesor Fernando Hinestrosa ***“el daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”.*** (Negrilla ajena a texto original). En línea con lo anterior, y bajo el entendido que a mi representada nada le consta respecto de los hechos en que se funda la presente litis, solicito al señor Juez que de no acreditarse el daño, se abstenga de proseguir con el estudio de los demás elementos de la responsabilidad médica, exonerando al extremo pasivo, y en consecuencia a mi representada.
2. En lo que concierne a la culpa probada. En lo que respecta a este elemento constitutivo de responsabilidad médica, desde ahora cumple señalar que en el sub examine no existe posibilidad de proferir condena en contra del CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE o sus consorciados, habida consideración que el demandante no ha acredita el hecho contrario, esto es, el desbordamiento de la idoneidad o infracción a la Lex Artis por parte del personal de salud.

En consecuencia, en caso de que el señor Juez corrobore lo expresado en líneas anteriores, es decir, no encuentre acreditada la culpa del CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE o sus consorciados, solicito sean denegadas las peticiones del actor, liberando así a los demandados y a mi representada de cualquier responsabilidad sobre los hechos que aquí se discuten.

3. En lo que atañe a la relación de causalidad. El nexo de causalidad constituye uno de los elementos fundamentales para que pueda predicarse la existencia de responsabilidad civil en cabeza de una persona. En virtud de este elemento, se determina una relación de causa y efecto entre la conducta del agente dañador y el daño sufrido por la víctima, surgiendo una obligación de reparación. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha utilizado distintas teorías de causalidad a través del tiempo, con el objetivo de determinar el mencionado vínculo de causalidad.

Actualmente, esta corporación aplica la teoría de la causalidad adecuada, en virtud de la cual se examina si en un contexto de normalidad, teniendo presente las reglas de la experiencia, la causa generalmente se deriva en el daño ocasionado.

Como muestra de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 25 de octubre de 1999 afirmó: ***Como desde antaño lo viene predicando la Corporación con apoyo en el tenor del artículo 2341 del Código Civil, para que resulte comprometida la responsabilidad de una persona natural o jurídica, a título extracontractual, se precisa de la concurrencia de tres elementos que la doctrina más tradicional identifica como “culpa, daño y relación de causalidad entre aquella y este”. Condiciones estas que además de considerar el cuadro axiológico de la pretensión en comentario, definen el esquema de la carga probatoria del demandante, pues es a este a quien le corresponde demostrar el menoscabo patrimonial o moral (daño) y que este se originó en la conducta culpable de quien demanda, porque al fin y al cabo la responsabilidad se engasta en una relación jurídica entre dos sujetos: el autor del daño y quien lo padeció”***²

La jurisprudencia ha sido pacífica al establecer que el nexo de causalidad debe ser probado en todos los casos por el actor, independientemente de si el régimen de responsabilidad aplicable está fundamentado en la culpa, en la falla, o en alguno de los regímenes de responsabilidad objetiva.

El nexo de causalidad es un elemento autónomo del daño y del fundamento que no admite, ningún tipo de presunción como sí lo admite la culpa o la falla.

El nexo de causalidad, como lo ha dicho tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, debe ser probado en todos los casos.

Así, por ejemplo en sentencia del 2 de mayo de 2002 dijo el Consejo de Estado: ***“El accionante también tiene que demostrar en juicio la causalidad adecuada entre el daño padecido y la conducta de riesgo imputada al Estado mediante prueba directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación causal ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho (s) el legislador infiera su causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de causalidad eficiente y determinante. La prueba del nexo puede ser: a) directa, mediante los medios probatorios que lo representan por sí mismo y/o b) indirecta, mediante***

² Corte Suprema de Justicia, Sala Civil., Sentencia del octubre 25 de 1999. Exp. 5012. M.P. Jose Fernando Ramirez Gomez

indicios; este medio de convicción lógico indirecto, requiere de la demostración de unos hechos indicadores que apunten con fuerza el hecho indicado...”³

En el caso que nos ocupa, pese a que ni si quiera se ha logrado acreditar el daño padecido, derivado de la mala atención médica, ni el obrar culposo o defectuoso que se pretende endilgar, menos aún, podemos referirnos a que en el presente caso se ha acreditado la relación de causalidad de los elementos de la responsabilidad civil médica; elementos que no pueden brillar por su ausencia teniendo en cuenta el tipo de responsabilidad que pretende la activa endilgar

Por último, tal y como se precisó a lo largo de la presente contestación de la demanda, no solo no existe nexo causal, sino que en el remoto e improbable caso de que se acreditara el mismo, nos encontramos frente al rompimiento de dicho vínculo debido a la presencia de al menos una de las modalidades de causa extraña.

2.3. ATENCIÓN ADECUADA Y OPORTUNA CONFORME A LA LEX ARTIS AL SEÑOR JEFFERSON MOLANO MEDINA POR EL PERSONAL MÉDICO

A fin de sustentar la presente excepción, resulta menester traer a colación lo expuesto por el doctrinante FERNANDO PANTOJA BRAVO, en su obra derecho de daños tomo III, cuando señaló, respecto de la lex artis, que: ***“La ley artis o ley propia del arte que se ejecuta, no es otra cosa que aquellos mandatos o reglas específicas, que deben ser observados dentro de determinado arte o técnica, a efectos de poder lograr o conseguir unos determinados resultados, en efecto puede decirse que esa lex artis se encuentra conformada por las reglas técnicas que deben seguirse con miras a la obtención de los resultados deseados, esperados y perseguidos, no solo por el paciente sino también por el médico, en beneficio de la salud, la integridad y la vida del primero”.***

Claro lo anterior, debemos partir de un primer escenario, como ya se ha visto a lo largo del presente libelo, según el cual corresponde a la parte actora acreditar los elementos constitutivos de la responsabilidad médica si quiere obtener la viabilidad de sus pretensiones.

Por su parte, a fin de desligarse de cualquier tipo de responsabilidad del CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE o sus consorciados, podrán acreditar la diligencia, pericia y cuidado con la que obraron sus galenos en la atención brindada al otrora paciente JEFFERSON MOLANO MEDINA, al tiempo que podrán alegar como medio de defensa la existencia de una cualquiera de las modalidades de causa extraña.

Así pues, tenemos que los profesionales de la salud, que atendieron a la Señor JEFFERSON MOLANO MEDINA, emplearon las técnicas y procedimientos conocidos en el ejercicio de la profesión médica, ello se acredita con las anotaciones consignadas en la historia clínica.

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente 13477

Por lo anterior, no son de recibo las infundadas acusaciones de la parte actora, en la medida en que, sin soporte probatorio alguno, pretende endilgar responsabilidad a los demandados ya que con esmero y profesionalismo trató a la Señor JEFFERSON MOLANO MEDINA ante una complicación de salud.

En consecuencia, de manera respetuosa solicito al señor Juez declarar probada la presente excepción, bajo el entendido que el extremo pasivo ha acreditado su diligencia y cuidado en la prestación del servicio médico que se le brindo a la Señor JEFFERSON MOLANO MEDINA.

2.4. EXCEPCION GENERICA

Propongo la excepción conocida como genérica, de conformidad con la cual deben ser declarados por el juzgador todas aquellas excepciones, fundadas en la ley y la constitución, que resulten probadas sin perjuicio de que no hayan sido expresamente enunciadas en este escrito

3. CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

3.1. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA:

1. No nos consta. Nos atenemos a lo que se pruebe dentro del procedo
2. NO ES CIERTO, el contrato lo suscribió NUEVA EPS con el **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE**, identificado con NIT **900.771.349-7**, quien no es una Institución Prestadora de Servicios de Salud y no con la **“I.P.S.NUEVO CONSORCIO RAFAEL URIBE URIBE”**
3. Es cierto
4. Es cierto
5. Nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso
6. No entendemos este hecho. No concluye
7. Nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso. Esa manifestación no es cierta
8. No es cierto. Este proceso versa sobre el paciente MIGUEL ANGEL CABEZASBGONZALEZ y no sobre la Señora CLARA INES GARCIA DE CAICEDO
9. Es cierto

3.2. OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

En nombre y representación de **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE**, me opongo a todas y cada una de las pretensiones que se elevan en el escrito del llamamiento en garantía, toda vez que no le asiste razón al apoderado judicial de la entidad llamante en garantía, por cuanto el **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE**, es un contrato.

3.3. DEFENSAS Y EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO

Además de las defensas y excepciones planteadas al ofrecer respuesta a todos los hechos de la demanda y de aquellas que resulten probadas en el proceso, que deben ser declaradas de oficio por el Despacho teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 292 del Código General del Proceso, propongo desde ahora las siguientes:

3.3.1. FALTA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Al confundir las figuras jurídicas propias del derecho público combinadas con las admitidas en el sector salud y no poder demostrar la relación directa en las condiciones del daño antijurídico con la consecuencia de la muerte en las actividades a desarrollar conforme a la atención en salud, no estamos llamados a responder y por ende los efectos propios de la sentencia no se pueden extender a nosotros.

El consorcio, entendido como contrato, no está regulado por la ley, pero podría enmarcarse en lo que se denomina “contrato de colaboración empresarial”. Lo anterior, porque es un acuerdo de voluntades destinado a producir derechos y obligaciones (contrato) por medio del cual sus partes buscan mutua ayuda para obtener un fin común. La misma definición doctrinal puede aplicarse a las uniones temporales.

Los consorcios no son personas jurídicas bajo ningún punto de vista.

En el momento en el que las personas jurídicas y/o naturales se unen en una de estas formas de asociación, no hacen otra cosa que hallar una manera de optimizar recursos, aprovechando las cualidades y calidades técnicas, administrativas, financieras o de infraestructura de cada uno de ellos.

El Consejo de Estado mediante fallo de fecha 23 de julio de 1987 indica:

“El consorcio no genera una nueva sociedad mercantil, porque al no estar constituida con todos los requisitos legales, no forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados (C. Co. artículo 98). Por similares razones tampoco es una sociedad irregular (C. Co. artículo. 500). Tampoco es una sociedad de hecho en definición legal, y por esta misma razón, carece de personería jurídica (C. Co. artículos. 98 y 499). Ni la ley lo considera cuenta en participación, que además, carece de personería jurídica (C. Co. artículo. 509)”.

De la misma manera en sentencia del Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Radicación: 25000232600019970392801 (20.529 Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Septiembre Veinticinco (25) De Dos Mil Trece (2013), se manifestó así:

*“En principio dirá la Sala que las uniones temporales, figuras admitidas en el artículo séptimo de la ley 80 de 1993 para efectos de contratación estatal, no configuran una persona jurídica nueva e independiente de los miembros que conforman dichas asociaciones. **Al no poseer tal naturaleza jurídica, carecen de capacidad para comparecer en proceso ante autoridades judiciales, conforme a lo prescrito en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.***

(...)

Al no constituir la unión temporal, ni el consorcio, una persona jurídica diferente de los miembros que la conforman, la capacidad para comparecer en proceso reposa en cabeza de las personas naturales o jurídicas que los integran.

Por ello, la Sala sostuvo en diversas oportunidades que si un consorcio, lo cual es igualmente válido para la unión temporal, comparecía a un proceso como demandante o demandado, cada uno de los integrantes debía hacerlo de manera individual integrando un litisconsorcio necesario, es decir que la parte solo se conformaría con la vinculación de todos sus miembros al proceso.

(...)

Considera la Sala necesario precisar que si bien el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 establece que los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal, esta representación está limitada, en principio, a las relaciones que genera el contrato con la entidad contratante.

Esta representación la habilita para actuar durante la adjudicación, celebración y ejecución del contrato, pero no, como en este caso, para actuar por fuera del marco contractual señalado (énfasis añadido).⁴

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia C-414 del 22 de septiembre de 1994, por medio de la cual declaró exequible el parágrafo 2o. del artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, afirmó ***“que los consorcios no constituyen personas jurídicas y que su representación conjunta tiene lugar para efectos de la adjudicación, de la celebración y de la ejecución de los correspondientes contratos”.***

Así se expresó la Corte Constitucional en la mencionada providencia:

“En nuestro régimen legal, la capacidad es la aptitud que se tiene para ser sujeto de relaciones jurídicas, es decir, para realizar sin el ministerio de otra persona, actos con efectos válidos en la esfera del derecho, y si bien esa habilitación se vincula con la noción de persona, hasta el punto de que toda persona, en principio, es capaz, salvo lo que en contrario disponga la

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 7 de diciembre de 2005; Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez; Radicación número: 76001-23-31-000-1998-00091-01(27651)

ley, no es requisito necesario ser persona para disponer de capacidad jurídica. En estos eventos el Estatuto no se refiere a una persona y sin embargo permite que los consorcios y las uniones temporales puedan contratar con el Estado, lo cual, en resumen, significa que la ley les reconoce su capacidad jurídica a pesar de que no les exige como condición de su ejercicio, la de ser personas morales. El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso, pero conservando los consorciados su independencia jurídica. El artículo 7o. de la mencionada ley se refiere al consorcio, pero en lugar de definir su contenido esencial, ofrece una relación descriptiva de la figura señalando los elementos instrumentales y vinculantes que lo conforman;según la ley, el consorcio es un convenio de asociación, o mejor, un sistema de mediación que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales."

No ofrece, entonces, discusión alguna el hecho de que tanto los consorcios carecen de personalidad jurídica diferente de aquella que acompaña a las personas naturales y/o morales que los integran.

3.3.2. NO RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO AL NO SER UN PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD

La estructura general de la Seguridad Social en Salud se encuentra contemplada en la ley 100 de 1993.

Dentro de la estructura de este sistema se encuentran los llamados promotores de servicios de salud, es decir las empresas con las cuales la persona contrata la prestación de los servicios de salud es decir las E.P.S, entidades, ya sea dentro del régimen contributivo o dentro del subsidiado, serán responsables de la afiliación y el registro de los afiliados. **"Su función básica será organizar y garantizar directa e indirectamente, la prestación del plan obligatorio a los afiliados....."**

Los prestadores de servicios de salud, están conformados por las instituciones prestadoras de servicios de salud, y los profesionales independientes de salud.

De esta manera, tenemos que, dentro de la prestación de servicios de salud, constituirán obligaciones de hacer: la administración del riesgo, la organización de la prestación y la prestación del servicio como tal; serán obligaciones de dar: el suministro de los medicamentos y elementos requeridos dentro de la prestación; obligación de no hacer: la obligación de no actuar en contra de los intereses relativos a la salud del paciente, tal como no hacer algo que vaya en contra de la voluntad del paciente, su autonomía y su integridad física, entre otras.

En consecuencia, se imponen obligaciones de resultado a dichas entidades, relacionadas con la organización y prestación de servicios de salud, dentro de un sistema de garantía de calidad; razón por la cual ante su incumplimiento se plantea una presunción de culpa en contra de éstas. La prestación de manera tardía, defectuosa o el incumplimiento puro y simple de las obligaciones que le señala la Ley, con capacidad suficiente para causar un daño al usuario, generará necesariamente responsabilidad que conlleva la obligación de indemnizar los perjuicios causados, exigibles a través de una acción contractual.

El artículo 7º de la ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) definió los consorcios y las uniones temporales así:

“Consortio:

Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

Unión Temporal:

Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. PARAGRAFO 1o. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará el consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad”.

Hemos manifestado previamente que los consorcios, entendido como contrato, no están regulado por la ley, pero podría enmarcarse en lo que se denomina “contrato de colaboración empresarial”. Lo anterior, porque es un acuerdo de voluntades destinado a producir derechos y obligaciones (contrato) por medio del cual sus partes buscan mutua ayuda para obtener un fin común. La misma definición doctrinal puede aplicarse a las uniones temporales.”

Los consorcios no son personas jurídicas bajo ningún punto de vista.

Ahora bien en el sector salud se permiten la conformación de consorcios de acuerdo a la Circular Externa 067 de 2010 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, que prevé esta forma de asociación de Prestadores de Servicios de Salud la cual permite su permanencia individualmente considerados, manteniendo su autonomía técnica, administrativa y financiera, permitiendo garantizar a través de esta asociación, la adquisición en conjunto y a bajo costo de insumos, servicios técnicos y medicamentos de alta calidad, la contratación de interventorías y auditorías para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, y permite la prestación de servicios integrales de salud facilitando a los usuarios el ingreso, accesibilidad, oportunidad y calidad de los mismos. Esta figura corresponde a la

asociación de prestadores de servicios de salud por medio de una unión temporal o de un consorcio.

En este sentido, señala la Circular externa 067 de 2010 que “el prestador de servicios de salud podrá ofertar y contratar individualmente la prestación de servicios de salud con las ERP, las Entidades que oferten planes Adicionales de salud, los particulares y demás pagadores del sistema de salud colombiano, si tiene como suministrarlos, y si los posee habilitados, o podrá contratar la prestación de servicios con las ERP, las Entidades que oferten planes Adicionales de salud, los particulares y demás pagadores del sistema de salud colombiano ya no como PSS individualmente considerado, sino como una asociación o alianza de prestadores de servicios de salud, a través de la asociación o la alianza con otro u otros PSS bajo la figura de unión temporal o consorcio”. (Subrayado fuera de texto)

Frente a los consorcios y uniones temporales, dispuso la Circular externa 067 de 2010, que los mismos deben conformarse antes de ofertar y contratar los servicios de salud con las entidades responsable del pago. Asimismo, es una obligación señalar los términos y la extensión de la participación de cada prestador de servicios de salud miembro de la unión temporal o del consorcio, así como las obligaciones de cada uno, frente a los usuarios y a las entidades contratantes.

Seguidamente, dispuso esta circular que es posible contratar la prestación de servicios de salud con los consorcios y las uniones temporales, siempre y cuando cada uno de los prestadores de servicios de salud que los conforman sean asociados de estos y se encuentren debidamente habilitados e inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1011 de 2006 y sus disposiciones reglamentarias. De esta manera, la asociación de prestadores de servicios de salud por consorcio o por unión temporal no debe figurar dentro del registro especial de prestadores de servicios de salud, pero sí es responsable de obtener de cada uno de los prestadores que conforman esta unión los certificados de habilitación correspondientes, con el objeto de acreditarla ante la entidad contratante

En este caso el prestador de servicios de salud que declara un servicio, es el responsable del cumplimiento de todos los estándares aplicables al servicio que inscribe, independientemente de que para su funcionamiento concurren diferentes organizaciones o personas para aportar en el cumplimiento de los estándares. El servicio que el Prestador de Servicios de Salud suministre a través de un agente tercerizador o externalizador debe ser habilitado exclusivamente por el Prestador de Servicios de Salud y no por el agente tercerizador o externalizador. Conforme a lo anterior, el Prestador de Servicios de Salud, se obliga a obtener y mantener vigente en forma exclusiva la inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud por la autoridad competente, los permisos, registros, licencias y títulos especiales que requieran la ley o las autoridades, de los servicios objeto del contrato de outsourcing, tercerización o de externalización para el ejercicio de estos y por ningún motivo, estos mismos, pueden ser inscritos en el registro especial de prestadores de servicios de salud por el tercero contratado o asociado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador.

Del mismo modo, asume íntegramente la responsabilidad por los perjuicios que se ocasionen por la extralimitación o por la ausencia de los permisos, licencias y títulos

especiales exigidos por parte de la ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias.

La jurisprudencia contencioso administrativa recientemente ha resaltado lo siguiente: “[L]os consorcios y, después de la ley 80 de 1993, las uniones temporales, son un conjunto de personas naturales o jurídicas que comparten un objetivo común, responden solidariamente por las obligaciones derivadas de la adjudicación y del contrato y **no constituyen una persona jurídica distinta de sus integrantes**, quienes mantienen su personalidad individual, sin perjuicio de que para efectos de la contratación designen un único representante **(Subrayas fuera del original)**.

De acuerdo con lo anterior y en ejercicio de la competencia expresa y explícita atribuida al Ministerio de Salud y Protección Social, se expidió la Resolución 3239 de 2013, quien manifiesta igualmente que los consorcios se constituyen o dan origen a una persona jurídica diferente a la que la integran, por ende, **no crea per se una Institución Prestadora de Servicios o IPS**, figura asociativa que , **no es sujeta de habilitación como IPS**

3.3.3. LITIS CONSORCIO NECESARIO POR ACTIVA

Los artículos 61 Y SS regulan las figuras jurídicas del litisconsorcio facultativo y necesario respectivamente. Entre otras diferencias, podemos afirmar que se distinguen, porque, en el primer caso el juez podrá dictar sentencia sin necesidad de vincular a otro sujeto de derecho, ya que cada uno de los integrantes del consorcio tiene una relación jurídica independiente, en el segundo, es necesaria la participación en el proceso de todos los sujetos de derecho que podrían llegarse a ver afectados por la decisión, debido a la unicidad de la relación sustancial materia del litigio, tal cual lo dispone el artículo 83 del C.P.C.

En sentencia del 13 de mayo de 2004³⁷ se abordó el tema de ¿Cuándo se entiende configurada la relación jurídica sustancial entre el consorcio y la entidad contratante, que obligue a conformar un litisconsorcio necesario y de esta manera se integre el contradictorio?

“que el derecho en litigio en esta situación (utilidad esperada), es un derecho subjetivo, propio e individual a cada una de las partes del consorcio o unión temporal, determinada por el porcentaje o las actividades que desarrollaría en la ejecución del contrato, elemento perfectamente divisible”⁵

En esa dirección se tenía por cierto entonces que si un consorcio –cuestión que resulta válida también para una unión temporal–, comparecía a un proceso en condición de demandante o de demandado, igual debían hacerlo, de manera individual, los partícipes que lo conforman para efectos de integrar el litisconsorcio necesario, es decir que la parte solo se tendría por debidamente conformada con la vinculación de todos y cada uno de ellos al respectivo proceso judicial. Así las cosas, mayoritariamente, hasta ahora, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de febrero de 2011, exp. 37.566, M.P. Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

de Estado, cuando ha resultado necesario abordar el estudio de casos en los cuales en uno de los extremos de la litis se ubica un Consorcio o alguno(s) de sus integrantes, ha señalado que habida consideración de que el Consorcio —al igual que la Unión Temporal— carece de personalidad jurídica, no puede ser tomado como sujeto de derecho apto para comparecer en un proceso jurisdiccional, así éste guarde relación con algún litigio derivado de la celebración o de la ejecución del contrato estatal respectivo:

Posteriormente, en providencia de diciembre 7 de 2005, la Sala reiteró que hay lugar a predicar la configuración de un litisconsorcio necesario respecto de los integrantes de los consorcios y de las uniones temporales, tanto adjudicatarios como no adjudicatarios, porque no son personas jurídicas, de tal manera que el litigio debe resolverse de modo uniforme para todos los sujetos que hubieren intervenido en la relación contractual; como corolario de ello, cuando los integrantes de un Consorcio o de una Unión Temporal tienen interés en ejercer el derecho de acción ante la Administración de Justicia o, por cualquier otra circunstancia, deben comparecer ante ella por razón de las actividades del Consorcio, son aquéllos individualmente considerados y no éste, quienes deben presentar la correspondiente demanda y/o intervenir en el proceso judicial correspondiente para defender sus intereses.

Según el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE PAGO LIBRO ABIERTO SUSCRITO ENTRE **NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - NUEVA EPS Y CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE**, está claramente determinado que el mismo está conformado por **CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE SAS** NIT 900891513-3, **CLINICA DESA SAS**, NIT 900771349-7 y el **INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO - IDIME**, NIT 800065396-2.

Y de acuerdo a lo tratado anteriormente y a *“que los consorcios no constituyen personas jurídicas y que su representación conjunta tiene lugar para efectos de la adjudicación, de la celebración y de la ejecución de los correspondientes contratos”*, los llamados a la actuación procesal debieron ser los consorciados, pero individualmente

FUNDAMENTO JURIDICO

El inciso 2° del artículo 62 de la Ley 1438 de 2011 consagra que “Las instituciones prestadoras de servicios de salud podrán asociarse mediante Uniones Temporales, consorcios u otra figura jurídica con Instituciones Prestadoras de Salud, públicas, privadas o mixtas. En ejercicio de su autonomía determinarán la forma de integración y podrán hacer uso de mecanismos administrativos y financieros que las hagan eficientes, observando los principios de libre competencia.”. Por su parte, la Circular Externa 067 de 2010, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, se pronunció sobre las formas de asociación y alianzas estratégicas, concluyendo que, entre los Contratos de Colaboración, el Contrato de Consorcio y el Contrato de Unión Temporal son los más adecuados para lograr el objetivo de que los Prestadores de Servicios de Salud se asocien y logren mancomunadamente prestar servicios de salud

De esta forma, sobre el particular, la aludida Circular señala: “El sector empresarial colombiano encuentra en los contratos de colaboración y sus modalidades de consorcio y la unión temporal, alternativas importantes para el desarrollo eficiente de actividades económicas relacionadas con la realización de diversos negocios jurídicos lo que les permite aumentar su competitividad y optimizar sus resultados, lo cual es de especial relevancia en el marco de la economía moderna. Los anteriores motivos incentivaron al legislador a incluir dentro del ordenamiento de contratación administrativa, la figura de los contratos de colaboración con participación a título de consorcio y de unión temporal, que, si bien no ofrece una noción clara y completa del género contractual, se constituye en un avance importante que debería replicarse con más y mejor juicio por la legislación comercial. El contrato de colaboración es entonces una forma de asociación, ha venido desarrollándose por la doctrina, pero se mantiene atípico en la Legislación Civil Colombiana. Sin embargo, el estatuto de contratación administrativa hace una referencia a las figuras del consorcio y de la unión temporal, como modalidades de los contratos de colaboración. Es claro que en relación con los contratos de colaboración no existen mayores esfuerzos normativos en nuestro ordenamiento jurídico. El legislador decidió incluir, en la Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación Administrativa, a los Consorcios y a las Uniones Temporales dentro de los sujetos con capacidad para celebrar contratos administrativos. [5] El convenio de consorcios o uniones temporales se realiza, en los términos del artículo 7o de la Ley 80 de 1993 y para tal efecto se tendrá en cuenta los elementos indicados en tal norma.” En este orden de ideas, la Circular reconoce que los Contratos de Colaboración son atípicos en la legislación colombiana; no obstante, remite a dos especies de este tipo de Contratos: los Contratos de Consorcio y los Contratos de Unión Temporal, los cuales encuentran su reglamentación en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Sin embargo, la regulación contenida en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 es limitada.

Frente la figura del consorcio o unión temporal, vale la pena traer en cita lo expresado por la Constitucional en apartes de la Sentencia T - 512 de 2007, así: “ (...) En tercer lugar, tanto la Corte Constitucional como el propio Consejo de Estado en sede contencioso administrativa, han resaltado que las uniones temporales, de hecho, no

constituyen personas jurídicas autónomas y que no puede entenderse que el representante que ellas designen las representa para efectos diversos a los propios del acuerdo que dio origen a la unión temporal. La Corte Constitucional en sentencia C-414 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), por medio de la cual declaró exequible el parágrafo 2o. del artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, afirmó que los consorcios y las uniones temporales, no son personas jurídicas y que su representación conjunta, lo es para efectos de la adjudicación, celebración y ejecución de los contratos.

Dijo la Corte:

“El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso, pero conservando los consorciados su independencia jurídica. El artículo 7o. de la mencionada ley se refiere al consorcio, pero en lugar de definir su contenido esencial, ofrece una relación descriptiva de la figura señalando los elementos instrumentales y

vinculantes que lo conforman;según la ley, el consorcio es un convenio de asociación, o mejor, un sistema de mediación que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.” (Las subrayas están fuera del original). Esta posición fue reiterada por la Corte en la sentencia C- 949 del 2001 (M.P. Clara Inés Vargas), así: “La Ley 80 de 1993, al crear las figuras de los consorcios y uniones temporales y constituir las como sujetos de la contratación administrativa, reconoce una realidad del mundo comercial que son los denominados “contratos de colaboración económica”, que en la hora actual se celebran para la efectiva realización de proyectos de contratación pública altamente especializados e intensivos en capital y así mismo indispensables para que el Estado Social de Derecho, cumpla los cometidos para los cuales fue instituido (Preámbulo y artículos 1 y 2 Superiores)”. Debe anotarse que, en la intervención de los consorcios y uniones temporales como uno de los extremos de la relación contractual, la autonomía de la voluntad está expresada por las actuaciones de sus miembros, que son los que al celebrar el respectivo contrato finalmente responden por las acciones u omisiones que se presenten con ocasión de la gestión contractual consorcial o de la asociación temporal. “ (Subraya de la Sala)”.

La jurisprudencia contencioso administrativa recientemente ha resaltado lo siguiente: “Los consorcios y, después de la ley 80 de 1993, las uniones temporales, son un conjunto de personas naturales o jurídicas que comparten un objetivo común, responden solidariamente por las obligaciones derivadas de la adjudicación y del contrato y no constituyen una persona jurídica distinta de sus integrantes, quienes mantienen su personalidad individual, sin perjuicio de que para efectos de la contratación designen un único representante” (Subrayas fuera del original).

En el caso que nos convoca no existe conducta, ni siquiera en los grados de acción u omisión de CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE y al romper con el primer elemento de la cláusula de responsabilidad patrimonial, no se debe entrar a analizar más circunstancias que la componen.

Es con lo anterior que la conducta de mi poderdante no presenta incorrección, sino que por el contrario genera una contundencia en la falta de relación a la atención en salud.

PRUEBAS

En primer lugar, manifiesto al Señor Juez que me adhiero la solicitud de pruebas realizada por todas las partes y las que los diferentes demandados propongan y me reservo el derecho a intervenir en todas y cada una de ellas, a fin de ejercer efectivamente el derecho de defensa y contradicción en favor de mi representado.

Adicionalmente solicito se admitan, decreten y practiquen las siguientes:

1. DOCUMENTALES

Acompaño a la presente contestación los siguientes documentos, para que sean tenidos en cuenta como pruebas dentro del proceso:

- a. Los que obran a proceso

2. DECLARACION DE PARTE

Solicito citar y hacer comparecer para que en audiencia cuya hora y fecha se servirá usted señalar, para que absuelvan el interrogatorio a instancia de propia parte que en sobre cerrado o personalmente formularé, a:

1. El representante Legal del CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE **JAIME QUINTERO SOTO**, identificado con el número de cédula 19.447.078 residenciado o domiciliado en la ciudad de Cali o quien haga sus veces al momento de la notificación, domiciliado residenciado en la ciudad de Cali en la CL. 25 No. 28N 17 y al correo jaime.quintero@cnruu.com.co

2. El representante Legal del NUEVA EPS S.A. o quien haga sus veces al momento de la notificación.

ANEXOS

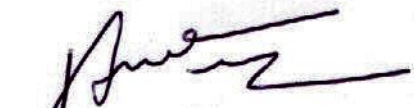
- Poder para actuar
- Acta de nombramiento del Representante Legal

• NOTIFICACIONES

- A los demandantes y demandados en la indicada en el libelo de la demanda.
- **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE, CL 25 NORTE 2 B 17**
Cali y email Para notificaciones judiciales jaime.quintero@cnruu.com.co,
- Al suscrito en la secretaria del despacho o en mi oficina ubicada en la Calle 100 No. 14 – 63 de Bogotá D.C. PBX 3001953 FAX 3001954 Email direccion@slcabogados.com.co

Del Señor Juez,

Cordialmente,



CARLOS ARMANDO SUSSMANN PEÑA
C.C. No. 3.229.002 expedida en Bogotá D.C.,
T.P.No. No. 89.069 expedida por el C.S. de la J.

“CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE”
COMISIÓN DE APROBACIÓN
ACTA N° 001

En la ciudad de Bogotá D.C., el 5 de septiembre de 2016, siendo las 12:30 horas, en las instalaciones del INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A., ubicadas en la Calle 76 No. 13-46 de la ciudad de Bogotá D.C., se reunió la COMISIÓN DE APROBACIÓN del CONSORCIO PARA LA CONTRATACIÓN Y LA PRESTACIÓN COORDINADA DE SERVICIOS DE SALUD, previa convocatoria hecha por el representante legal suplente del Consorcio, a cada uno de los integrantes de comisión.

Para el desarrollo de la reunión se propuso el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la reunión.
3. Elección del nuevo Representante Legal Principal del Consorcio.
4. Lectura y aprobación del acta
5. Fin de la sesión.

El orden del día presentado a consideración de la reunión de la comisión de aprobación fue aprobado por unanimidad.

El Orden del Día se desarrolló como sigue:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

ASISTENTES	IDENTIFICACIÓN
MARIA ISABEL RODRIGUEZ VEGA	C.C. 23.754.954
LIDA YAMILE GONZALEZ BOLIVAR	C.C. 52.173.813
JORGE ANDRÉS GUEVARA VACA	C.C. 79.601.210

Se verificó la existencia de quórum para deliberar y decidir, teniendo en cuenta la presencia de la totalidad de los miembros de la comisión.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

Por unanimidad los miembros de Junta designaron a la Dra. LIDA YAMILE GONZALEZ BOLIVAR, como Presidente de la reunión y a la Dr. JORGE ANDRÉS GUEVARA VACA como secretario quienes estando presentes aceptan y asumen sus cargos.

3. ELECCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.

La presidente de la reunión toma la palabra y expone a los demás miembros de la comisión, la necesidad de ratificar el nombramiento del representante del **CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE**, en razón las aclaraciones y modificaciones y adiciones del ACTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO DENOMINADO "**CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE**" PARA LA CONTRATACIÓN Y LA PRESTACIÓN COORDINADA DE SERVICIOS DE SALUD surgidas mediante el Otro Si No. 1 de fecha 2 de septiembre de 2016.

Una vez expuesto lo anterior, de conformidad lo establecido en el numeral tercero de la cláusula Decima Primera del Acta de Conformación del consorcio, la COMISIÓN DE APROBACIÓN tiene como función "Nombrar y remover al representante legal del **CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE**".

Para tal efecto, los miembros de la COMISIÓN DE APROBACIÓN proceden a verificar los nombramientos de los representantes legales de las sociedades **INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A.**, **CLINICA DESA S.A.S.** y **CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE** mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por las cámaras de comercio de los domicilios de cada sociedad.

Una vez verificado lo anterior, la Comisión de Aprobación del "**CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE**", en ejercicio de las facultas consagradas en la cláusula decima primera del acta de conformación, por indicación de la presidente de la reunión sometió a votación el siguiente proyecto de resolución, el cual fue aprobado por todos los miembros asistentes quienes votaron afirmativamente y de manera unánime la siguiente resolución:

"RESOLUCIÓN No. 1"

La comisión de aprobación del **CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE**
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar como representante legal principal del consorcio al doctor **JAIME QUINTERO SOTO** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.447.078, quien ha sido designado como **GERENTE GENERAL MÉDICO** de la sociedad **CLINICA DESA S.A.S.**

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar como primer suplente del representante legal del consorcio, a la Doctora **LIDA YAMILE GONZALEZ BOLIVAR** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.173.813 expedida en Bogotá, quien es la representante legal principal de la sociedad **INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A.**

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar como segundo suplente del representante legal del consorcio, al Doctor **JORGE ANDRÉS GUEVARA VACA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.601.210 expedida en Bogotá, quien es el representante legal suplente de la sociedad **CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE**.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Acto seguido se decretó un receso de 30 minutos con el fin de elaborar el Acta correspondiente, una vez transcurrido dicho receso y con un quórum igual al inicial se reunió nuevamente se dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 13:30 horas se levantó la sesión y en constancia se firma como aparece.

La Presidente,

El Secretario,

ORIGINAL FIRMADO

LIDA YAMILE GONZALEZ BOLIVAR

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ANDRÉS GUEVARA VACA

ORIGINAL FIRMADO

MARIA ISABEL RODRIGUEZ VEGA

El presente documento es fiel copia del Acta No. 001 de la Comisión de Aprobación del consorcio **"NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE"** y reposa en el libro de actas del consorcio.

En constancia firmo.



JORGE ANDRÉS GUEVARA VACA
Secretario



Consorcio
Nueva Clínica
Rafael Uribe Uribe

Señores

JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
CALI - VALLE DEL CAUCA

REFERENCIA	:	ACCION DE REPARACION DIRECTA
PROCESO	:	760013300920200000800
DEMANDANTES	:	LUZ STELLA MEDINA TOVAR Y OTROS
DEMANDADOS	:	CONSORCIO NUEVA CLÍNICA RAFAEL URIBE Y OTROS

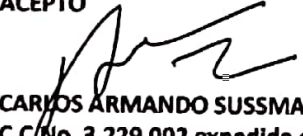
JAIME QUINTERO SOTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19447078 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE SAS**, identificada con el NIT 900904515, con dirección CL 25 NORTE 2 B 17 Cali y email Para notificaciones judiciales jaimquintero@cnruu.com.co, por medio del presente escrito me permito manifestarle que confiero poder amplio y suficiente al **Dr. CARLOS ARMANDO SUSSMAN PEÑA** mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.229.002 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la tarjeta profesional No. 89.069 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, con dirección Calle 100 No. 14 – 63 y Email inscrito en el Registro Nacional de Abogados direccion@slcabogados.com.co, quien actuara como apoderado PRINCIPAL dentro del proceso de la referencia y al **Dr. JUAN DAVID SUSSMANN WAGNER** mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.871.471 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la tarjeta profesional No. 227.792 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura con dirección Calle 100 No. 14 – 63 y Email inscrito en el Registro Nacional de Abogados juan@slcabogados.com.co, quien actuara como abogado SUPLENTE, para que nos represente dentro del proceso de la referencia

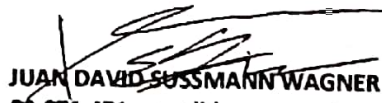
El apoderado queda facultado para ejercer todos los actos inherentes al mandato, así como lo establece el artículo 77 del C.G.del P. Igualmente lo autorizo para recibir, desistir, sustituir, reasumir, transigir y/o conciliar y las necesarias para la defensa de nuestros intereses.

Cordialmente,


JAIME QUINTERO SOTO
C.C.No. 19447078 de Bogotá

ACEPTO


CARLOS ARMANDO SUSSMANN PEÑA
C.C.No. 3.229.002 expedida en Bogotá
T.P.No. 89.069 expedida por el CSJ


JUAN DAVID SUSSMANN WAGNER
80.871.471 expedida en Bogotá
T.P. No. 227.792 expedida por CSJ

Calle 25 Norte No 2bn-17, Tel: 4850115, Ext 270
Correo: gerencia@cnruu.com.co
Cali, Valle

Señores
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

MEDIO DE CONTROL	:	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE	:	LUZ ESTELA MEDINA TOVAR Y OTROS
DEMANDADOS	:	MUNICIPIO DE CALI Y OTROS
RADICADO	:	76001-33-33-009-2020-00008-00
ACTO PROCESAL	:	LLAMAMIENTO EN GARANTIA CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A

CARLOS ARMANDO SUSSMANN PEÑA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.229.002 expedida en Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 89.069, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá en mi calidad de apoderado judicial de **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE**, identificada con el NIT **900904515** según poder y documentos que reposan en el expediente, procedo a **LLAMAR EN GARANTIA**, en el mismo asunto referenciado a **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, sociedad domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con **NIT 860.026.518-6**, y representada legalmente por **FRANCISCO OBREGÓN TRILLOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.151.183 o por quien haga sus veces al momento de la notificación por considerar que mi poderdante, tiene derecho a que en sentencia se resuelva sobre la relación sustancial y los pagos de indemnizaciones a que hubiere lugar entre estos y los demandantes

HECHOS

- 1. CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE** es un consorcio conformado para la atención en salud que reúne los requisitos mínimos esenciales exigidos por las autoridades competentes de acuerdo con el nivel de complejidad y a la especialidad.
- 2. CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE** tiene vigente para la fecha de los hechos, una póliza de seguros de responsabilidad civil Profesional Medica, No. 12/46949 con **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, sociedad domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con **NIT 860.026.518-6**,.

3. CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE fue demandado llamado en Garantía por **NUEVA EPSQUIEN FUE DEMANDADA POR** por **_LUZ STELLA MEDINA Y OTROS**

FUNDAMENTO JURIDICO

El artículo 64 del C.G. del P establece:

ARTÍCULO 64. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

RESPONSABILIDAD PARA EL LLAMAMIENTO EN GARANTIA

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., expidió una póliza de seguros que cubre Responsabilidad Civil Profesional Medica, Sector Salud, derivado de la prestación de servicios, objeto de **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE** , en la modalidad **CLAIMS MADE**

De Acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE PAGO LIBRO ABIERTO SUSCRITO ENTRE **NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - NUEVA EPS Y CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE**, existe una cláusula de indenmidad y frente al remoto hecho que el **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE** . tenga alguna responsabilidad en la atención y posterior fallecimiento del Sr **JEFFERSON MOLANO MEDINA**, el llamado a indemnizar por efectos de la póliza seria **CHUBB SEGUROS DE COLOMBIA S.A.**

Se concluye luego, que ante el remoto hecho de demostración de fuente de culpa de parte de **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE** . o de su personal de salud la llamada a responder patrimonialmente es **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, por efectos de la póliza mencionada

En el contrato celebrado entre **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE** y **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.** esta, ultima, por razón del seguro suscrito esta llamada a responder y por tanto tiene cabida el LLAMAMIENTO EN GARANTIA, pues se busca que en la medida en que **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE** en la remota posibilidad de que llegue a ser condenada o sufra un perjuicio por el pago que tuviere que hacer por orden de un juez, como consecuencia de los

planteamientos de la demanda , **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.** , debe rembolsar total o parcialmente, lo que deba pagar o haya pagado mi poderdante, debiendo entonces decidirse la relación sustancial, ya sea legal o contractual, entre **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE** y **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**

PRETENSIONES

- 1.** Sírvase resolver sobre la relación contractual y legal que existe entre **CONSORCIO CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE** . y **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**
- 2.** Como consecuencia de lo anterior sírvase Señor Juez, LLAMAR EN GARANTÍA a **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**
- 3.** Que, como resultado de lo anterior, se condene a **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.** a pagar a favor de mi mandante todas las sumas de dinero en que sea condenado por efectos del presente proceso y el valor de los gastos y costas
- 4.** Que, como resultado de lo anterior, se condene a **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.** a pagar a favor de mi mandante el valor de los gastos y costas que se hubiere incurrido el presente proceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Art 64 y 65 del C.G. del P. y normas concomitantes

PRUEBAS

- 1.** La demanda y los anexos, promovida por **LUZ ESTELLA MEDINA Y OTROS**
- 2.** El llamamiento en Garantia promovido por NUEVA EPS
- 2.** Los testimonios y declaraciones y demás solicitados como pruebas en la demanda y en las diferentes contestaciones de la demanda.

ANEXOS

- Copia de este escrito en PDF para el respectivo archivo del juzgado
- Certificado de Representación legal de CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A..

- 1.** - PDF de la Póliza No. **46949**

- Los que se mencionan en el acápite de pruebas

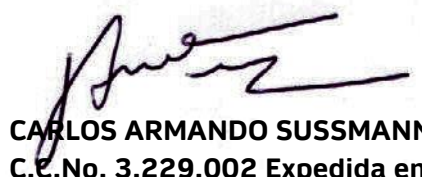
NOTIFICACIONES

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. Carrera 7 No. 71-21, Torre B Piso 7. Bogotá
Email notificacioneslegales.co@chubb.com Teléfono comercial 1: 3190300

AL CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE en la CL 25 NORTE 2 B 17
Cali y email jaime.quintero@cnruu.com.co

Al suscrito en la secretaria del despacho o en mi oficina ubicada en la Calle 100 No.
14 – 63 de Bogotá. PBX 3001953 FAX 3001954 Email
direccion@slcabogados.com.co

Del Señor Juez,



CARLOS ARMANDO SUSSMANN PEÑA
C.C.No. 3.229.002 Expedida en Bogotá
T.P. No. 89.069 Expedida por el CSJ



Señores
JUZGADO NOVENO (9) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

DEMANDANTES	LUZ STELLA MEDINA TOVAR Y OTROS
DEMANDADO	CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE Y OTROS
PROCESO	REPARACIÓN DIRECTA – FALLA EN EL SERVICIO
RADICADO:	76001333300920200000800
ACTO PROCESAL	RECURSO DE REPOSICIÓN (control legalidad) Y EN SUBSIDIO APELACIÓN

LEGITIMACIÓN

CARLOS ARMANDO SUSSMANN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.229.002 expedida en la ciudad de Bogotá D. C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 89.069 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, ACTUANDO en calidad de apoderado judicial del **CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE** identificado con NIT 900.904.515-6 con domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali., el cual está conformado por la **CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE SAS** NIT **900891513-3**, **CLINICA DESA SAS**, NIT **900771349-7** y el **INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO - IDIME**, NIT **800065396-2** según poder, el cual adjunto, otorgado por su Representante legal, JAIME QUINTERO SOTO, identificado con el número de cédula 19.447.078 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., en tiempo y oportunidad haciendo uso del derecho constitucional de defensa y contradicción por medio del presente escrito presento recurso de reposición (control legalidad) y en subsidio apelación por lo siguiente a saber:

OPORTUNIDAD

Estando en el término dispuesto en el auto de fecha diez (10) de octubre de 2023, en el estado del once (11) de octubre de 2023, por lo que la oportunidad procesal para proponer recurso de reposición (control legalidad) y en subsidio apelación precluye el día diecisiete (17) de octubre de 2023, término en el cual estará radicado este escrito.

HECHOS

1. Estima el despacho a través de auto, tener por contestada la demanda en relación con mis poderdante CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE S.A.S. y CLINICA DESA S.A.S., en el numeral primero del decide, del auto calendarado con diez (10) de octubre de 2023, en el estado del once (11) de octubre de 2023.
2. Ante dicho auto nace la necesidad de recurrir bajo la institución jurídico procesal de reposición (control legalidad) subsidiada en apelación la decisión, toda vez que el escrito de contestación si fue radicado dentro de la oportunidad procesal para hacerlo.

DEL RECURSO

El Honorable despacho que preside el juez de conocimiento, para la fecha cinco de mayo de 2023 ordena notificar a través de su secretaria, a la partes procesales, el auto admisorio de la demanda, ordenando el termino legal de treinta (30) días para que se allegue el escrito contentivo de la contestación de demanda.

En ese punto, el computo de términos es el siguiente:

Dos (2) días para que el termino comience a correr, al tenor literal del artículo 48 de la ley 2080 de 2021, y treinta (30) días más para la contestación. Lo anterior nos deja como termino en oportunidad la fecha del veintitrés (23) de junio de 2023.

En esa posición, solite a través de sendo memorial el contenido del expediente, virtual, porque en el auto de notificación de la admisión del proceso tuvo problemas con el link, esto fue el ocho (8) de junio de 2023 y el envió del link fue el nueve (9) de junio de 2023.

Con el proceso analizado y reconocido, se procede a enviar el documento contentivo de la respuesta al llamamiento en garantía, en dos archivos el nueve (9) de junio de 2023, uno la respuesta a la demanda de llamamiento y la otra con una llamamiento en garantía a la compañía de seguros, correos enviado al abonado buzón of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co, correo que además se usó para solicitar el link del expediente virtual que además llevo y haciendo caso a lo enunciado en el correo que se copia, en donde expresamente indican donde se pueden enviar las respuestas y las solicitudes:

eMail: jaime.quintero@cnruu.com.co
Dirección: , CALI (VALLE)

ACTOR: LUZ STELLA MEDINA TOVAR Y OTROS
DEMANDANDO: NUEVA EPS Y OTRO
RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2020-00008-00
ACCION DE REPARACION DIRECTA

Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en la fecha 04/05/2023 se emitió Auto resuelve llamamiento garantía en el asunto de la referencia.

NOTIFICACION PERSONAL AUTO ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTIA. TRASLADOS EN
EXPEDIENTE ONEDRIVE: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/adm09cali_cendoj_ramajudicial_gov_co/EraepKuRn6tGnmZ8QCnzXlD5BuUVSCQaNyb4w?e=H8aVMR

~~Las respuestas y solicitudes pueden ser enviadas a través del siguiente correo electrónico:~~
~~of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co~~

En el orden de ideas anterior, se observa que el juzgado no tiene ni siquiera radicado dichos documentos porque no reposan en el expediente digital, pero dicho documentos si fueron enviados al despacho inclusive con muchos días de anticipación a la preclusión de la oportunidad procesal.

Prueba de lo anterior:

direccion@slcabogados.com.co

De: direccion@slcabogados.com.co
Enviado el: viernes 9 de junio de 2023 4:36 p. m.
Para: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Asunto: Radicado 76001-33-33-009-2020-00008-00
Datos Adjuntos: Contestación Demanda Luz Stella Medina y Otros.pdf
Llamamiento en Garantía CHUBB Seguros.pdf

En mi calidad de apoderado de CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE dentro del proceso de la referencia, respetuosamente me dirijo al despacho con la finalidad de enviar CONTESTACION DE LLAMAMIENTO EN GARANTIA efectuado por NUEVA EPS y LLAMAMIENTO EN GARANTIA a CCHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.I para su conocimiento y fines pertinentes

Así mismo y de conformidad con lo contemplado en el inciso primero del art. 3º del Decreto Legislativo 806 de 2020, en concordancia con lo establecido en el artículo 78 numeral 5 del CGP, cumpliendo con la carga procesal impuesta estamos enviando a los demás sujetos procesales copia del presente mensaje con su respectivo adjunto.

Igualmente de acuerdo a lo establecido en la citada en norma, nos permitimos informar que el correo electrónico para efectos de notificaciones judiciales dentro del presente proceso, el cual es el que obra en el Registro Nacional de Abogados es: direccion@slcabogados.com.co



CARLOS ARMANDO SUSSMANN P
Director
Phone: +57 1 3001953 Ext. 101
Mob: +57 1 3108596301
Email: direccion@slcabogados.com.co

SUSSMANN LEGAL Calle 100 No. 14 - 63 - Oficina 401 - Bogotá, Colombia

CONSULTING SAS www.slcbogador.com.co

DERECHO MEDICO – RESPONSABILIDAD MEDICA

Este mensaje y los archivos adjuntos remitidos con él han sido elaborados únicamente para uso del destinatario y pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial. Si el lector de este mensaje no es el destinatario señalado, o la persona responsable por la entrega de este mensaje a quien está dirigido, queda usted advertido de que cualquier revisión, divulgación, difusión o copia no autorizada de este mensaje y sus archivos adjuntos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor sírvase informarlo de inmediato al remitente respondiendo este mensaje y por favor, bórnelo de su computadora. Finalmente, si un correo electrónico enviado a través de nuestro servidor (slcabogados.com.co) no contiene información directamente relacionada con nuestro giro de negocio y propósitos de este, entonces deberá ser considerado como que refleja la opinión personal del remitente, bajo responsabilidad exclusiva de éste, y de ninguna manera involucrará o comprometerá a nuestra empresa.

En ese orden de ideas se hace necesario que el juzgado revise a través de un control de legalidad interno, la trazabilidad de los correo y que sea este mismo quien reforme la decisión o que vaya a la instancia superior que revise el recurso y revoque el numeral primero del decido de auto citado.

P R U E B A S

- Archivo PDF donde se verifica el envío del correo contentivo de los archivos de contestación del llamamiento en garantía y el llamado en garantía.
- Archivo PDF con contestación de llamamiento en garantía.
- Archivo PDF con llamamiento en garantía.

SOLICITUDES

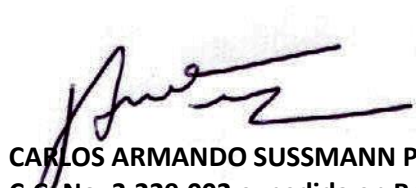
PRIMERA: Se revoque el numeral primero de la decisión del auto del fecha diez (10) de octubre de 2023, en el estado del once (11) de octubre de 2023, en lo relacionado con el efecto de tener por no contestada a mis poderdantes, CONSORCIO A NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE, conformada por CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE S.A.S. y CLINICA DESA S.A.S.

SEGUNDA: En ese orden de ideas, se de por presentado la contestación en tiempo y oportunidad y se obligue al aquo a realizar el análisis y posterior efecto de dar por contestada la demanda de forma causal como realizo.

TERCERA: Se ordene a seguir con las actuaciones procesal que en derecho corresponde.

Del Señor Juez,

Cordialmente,



CARLOS ARMANDO SUSSMANN PEÑA
C.C. No. 3.229.002 expedida en Bogotá
T.P. No. 89.069 expedida por el CSJ

De: direccion slcabogados.com.co
Enviado el: viernes 9 de junio de 2023 4:56 p. m.
Para: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Asunto: Radicado 76001-33-33-009-2020-00008-00
Datos Adjuntos: Contestación Demanda Luz Stella Medina y Otros.pdf
Llamamiento en Garantía CHUBB Seguros.pdf

En mi calidad de apoderado de **CONSORCIO NUEVA CLINICA RAFAEL URIBE URIBE** dentro del proceso de la referencia, respetuosamente me dirijo al despacho con la finalidad de enviar CONTESTACION DE LLAMAMIENTO EN GARANTIA efectuado por NUEVA EPS y LLAMAMIENTO EN GARANTIA a CCHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.l para su conocimiento y fines pertinentes

Así mismo y de conformidad con lo contemplado en el inciso primero del art. 3º del Decreto Legislativo 806 de 2020, en concordancia con lo establecido en el artículo 78 numeral 5 del CGP, cumpliendo con la carga procesal impuesta estamos enviando a los demás sujetos procesales copia del presente mensaje con su respectivo adjunto.

Igualmente de acuerdo a lo establecido en la citada en norma, nos permitimos informar que el correo electrónico para efectos de notificaciones judiciales dentro del presente proceso, el cual es el que obra en el Registro Nacional de Abogados es: direccion@slcabogados.com.co



CARLOS ARMANDO SUSSMANN P

Director

Phone: + 57 1 3001953 Ext. 101

Mob: +57 1 3108596301

Email: direccion@slcabogados.com.co

SUSSMANN LEGAL Calle 100 No. 14 - 63 - Oficina 401 - Bogotá, Colombia

CONSULTING SAS www.slcabogados.com.co

DERECHO MEDICO – RESPONSABILIDAD MEDICA

Este mensaje y los archivos adjuntos remitidos con él han sido elaborados únicamente para uso del destinatario y pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial. Si el lector de este mensaje no es el destinatario señalado, o la persona responsable por la entrega de este mensaje a quien está dirigido, queda usted advertido de que cualquier revisión, divulgación, difusión o copia no autorizada de este mensaje y sus archivos adjuntos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor sírvase informarlo de inmediato al remitente respondiendo este mensaje y por favor, bórralo de su computadora. Finalmente, si un correo electrónico enviado a través de nuestro servidor (@slcabogados.com.co) no contiene información directamente relacionada con nuestro giro de negocio y propósitos de este, entonces deberá ser considerado como que refleja la opinión personal del remitente, bajo responsabilidad exclusiva de éste, y de ninguna manera involucrará o comprometerá a nuestra empresa.

This email message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any unauthorized review, disclosure, dissemination or copying of this message or its attachments, is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by replying to this message and please delete it from your computer. Finally, if an email sent through our server (**@slcabogados.com.co**) does not contain information directly related to our line of business and the purposes thereof, then it should be regarded as reflecting the personal opinion of the sender, at his sole responsibility, and will in no way bind or commit our company